



Roj: **STSJ CAT 2081/2021 - ECLI:ES:TSJCAT:2021:2081**

Id Cendoj: **08019330032021100209**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Barcelona**

Sección: **3**

Fecha: **17/03/2021**

Nº de Recurso: **124/2020**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **FRANCISCO LOPEZ VAZQUEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJCA, Barcelona, núm. 1, 04-09-2019,
STSJ CAT 2081/2021**

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección Tercera

Rollo de apelación número 124/2020 (S)

Dimanante del recurso ordinario nº 266/13 del JCA 1 Barcelona

Parte apelante: Ayuntamiento de Montcada i Reixac

Parte apelada: D. Anton y "R.S. PATRIMONI, SL"

SENTENCIA Nº 1.222

Ilmos. Sres. Magistrados

Javier Aguayo Mejía (Presidente)

Manuel Táboas Bentanachs

Francisco López Vázquez

En la ciudad de Barcelona, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, constituida al efecto para la votación y fallo, ha visto, en el nombre de S.M. el Rey de España, el recurso de apelación seguido ante la misma con el número de referencia, promovido, en su calidad de parte apelante, a instancia del Ayuntamiento de Montcada i Reixac, representado por el procurador de los tribunales Sr. Rodés Menéndez, contra D. Anton y "R.S. PATRIMONI, SL", representados, en su calidad de parte apelada, por el procurador Sr. Fontquerni Bas, versando el recurso sobre materia de **expropiación**, y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por el Juzgado número 1 de los de Barcelona, en los autos de su referencia indicada, se dictó sentencia número 213, de 4 de septiembre de 2.019 (con auto de 15 de octubre siguiente), estimando en parte el recurso presentado y anulando el acto impugnado, ordenando al Ayuntamiento el pago del justiprecio acordado en su día por el Jurado de Expropiación de Cataluña y condenándole al pago de los intereses de demora acreditados por la recurrente, desde la presentación de la hoja de aprecio, a liquidar en ejecución de sentencia, una vez abonada la totalidad del justiprecio.

SEGUNDO. Interpuesta apelación, admitida, formulada oposición, remitidas las actuaciones a la sala y comparecidas las partes, se señaló la votación y fallo para el 1 de marzo de 2.021, tras seguirse en la tramitación las prescripciones legales, salvo las referidas a los plazos, ante la carga de trabajo que pende ante la sección.

TERCERO. Esta sentencia se dicta en ejecución de las medidas de refuerzo de esta sala previstas en el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 4 de enero de 2.021. Es ponente el Ilmo. Sr. López Vázquez, quien expresa el parecer unánime del tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La cuestión aquí debatida tiene su origen en la sentencia dictada por la Sección Segunda de esta misma sala el 21 de marzo de 2.012, con el número 232 (recurso 524/2009), recaída en proceso promovido por el Ayuntamiento de Montcada i Reixac y que confirmó la resolución del Jurat d'Expropiació de Catalunya, Sección de Barcelona, de 31 de julio de 2.009, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la de 23 de diciembre de 2.008, donde se fijó en 1.907.088,53 euros el justiprecio de la finca expropiada a la aquí apelada, que instó su expropiación al amparo del entonces vigente artículo 108 de la Ley 2/2002, de Urbanismo de Cataluña.

En el último párrafo del fundamento jurídico tercero de la indicada sentencia se lee lo siguiente:

"Concluida así la procedencia de la expropiación por ministerio de la ley, y no realizando la demanda objeción alguna a la valoración realizada por el Jurat, ni siquiera de forma subsidiaria o alternativa, procede la desestimación del recurso sin necesidad de mayores razonamientos".

SEGUNDO. Es decir, el ayuntamiento aquí apelante, que en aquel proceso donde se discutía el justiprecio de la finca no realizó ni propuso objeción alguna a la valoración realizada por el jurado, ni siquiera de forma subsidiaria o alternativa, pretende ahora nada menos que, primero el juzgado de instancia y luego esta sala, modifiquen una sentencia firme e intangible, cuya revisión no consta interesada por alguno de los motivos enumerados en el artículo 102 de la ley jurisdiccional, aduciendo, bien extemporáneamente y con la inaceptable pretensión de que el justiprecio se modifique, que en su momento hubo una inexacta identificación en el expediente de la finca expropiada y de su superficie; que sobre la misma existía una carga real consistente en una servidumbre de paso de gas natural a favor de cierta empresa, servidumbre que habría sido silenciada por la propiedad a lo largo del expediente; y que una parte de la finca estaba ocupada por terceros desde hacía años, lo que también se habría ocultado en el expediente.

Sobre tales bases, tacha a la sentencia de instancia de incongruencia omisiva, por no haberse pronunciado sobre esas cuestiones; propone la improcedencia del pago del resto del justiprecio todavía pendiente hasta la cancelación de la carga y discute incluso los intereses de demora.

TERCERO. Conviene no olvidar que, como ha proclamado el Tribunal Constitucional, el derecho a que la ejecución de lo juzgado se lleve a cabo "en sus propios términos", es decir, con sujeción al principio de inmodificabilidad de lo juzgado, se traduce en un derecho subjetivo del justiciable, que "actúa como límite y fundamento que impide que los jueces y tribunales puedan revisar las sentencias y demás resoluciones al margen de los supuestos taxativamente previstos en la ley". Por lo tanto, en estos casos, el derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, al constituir un presupuesto lógico del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes, se integra en el citado derecho fundamental (SSTC 49/2004, de 30 de marzo, FJ 2; 116/2003, de 16 de junio, FJ 3; 139/2006, de 8 de mayo, FJ 2).

Y en lo que respecta a los intereses, estos se devengan desde la presentación de la hoja de aprecio, como correctamente considera la sentencia impugnada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 108.2 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña, de temporal aplicación al caso.

CUARTO. Atendidos los términos del artículo 139.2 de la ley jurisdiccional y no observándose razones que justifiquen su no imposición, procede condenar en costas en la presente alzada a la parte apelante, bien que con el límite que se dirá. Vistos los preceptos citados y demás de aplicación al caso,

FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto en nombre y representación del Ayuntamiento de Montcada i Reixac contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de los de Barcelona de 4 de septiembre de 2.019, cuya parte dispositiva necesaria se ha relacionado. Con imposición



a la parte apelante de las costas causadas por las actuaciones seguidas con motivo de esta apelación, bien que limitadas, por todos los conceptos, IVA incluido, a la cantidad máxima de **3.000 euros (tres mil euros)**.

Firme que sea esta resolución, con certificación de la misma y atento oficio en orden a la ejecución de lo resuelto, procédase a la devolución al juzgado de procedencia de las actuaciones y expediente recibidos.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciendo saber que no es firme, pudiendo interponer frente a ella recurso de casación, preparándolo ante esta misma sala y sección, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª, Capítulo III, Título IV, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el plazo previsto en su artículo 89.1.

Adviértase de que en el Boletín Oficial del Estado nº 162, de 6 de julio de 2.016, aparece publicado el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2.016 sobre extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Ilmo. Sr. magistrado ponente, constituido en audiencia pública. Doy